



Momento de la reunión mantenida en Belfast por los norirlandeses estafados por la inmobiliaria Ocean View Properties. / CABANILLAS

Un centenar de familias irlandesas, víctima de una estafa inmobiliaria en Estepona

Entregaron la señal para una promoción de 350 viviendas y los responsables de Ocean View Properties se apoderaron de cerca de seis millones de euros en depósitos

gura que «el señor Miranda nos dijo que nuestros depósitos estaban a buen recaudo», algo que no se creen después de haber intentado durante cuatro años ver siquiera algo del dinero entregado.

Las víctimas de esta estafa solicitaron incluso una reunión con el primer ministro norirlandés, Peter Robinson, para trasladarle sus quejas. También lamentan el nulo interés de los medios de comunicación del Ulster por este caso. De ahí que se decidieran a contactar con EL MUNDO.

«Nos dijeron que Disney World iba a ir a Estepona y todo resultó ser una estafa de unos gangsters»

Lidia y su marido Alec forman parte de una familia numerosa que hizo una gran inversión en Estepona. Concretamente, pagaron 73.000 libras esterlinas en septiembre de 2006 –aproximadamente 90.000 euros al cambio de la época– a Ocean View Properties. «Les mandamos los contratos firmados, pero nunca nos los devolvieron con sus firmas, fue una gran mentira», afirma ella.

La pareja sostiene que cómo no iban a confiar en la solvencia de la promoción en la que invirtieron «si la LTA Tennis Nation (Federación Británica de Tenis) participaba en el proyecto con Ocean View para construir pistas en la urbanización».

Jeff cuenta que un agente inmobiliario de Irlanda del Norte le invitó a viajar a Estepona para ver la parcela: «Fueron muy profesionales y nos hicieron una presentación virtual de vídeo y audio». Allí conocieron a los directivos de Ocean View.

«Nos dijeron que Disney World iba a ir a Estepona y todo resultó ser una estafa montada por unos gangsters». Algunos de los afectados pidieron a este periódico que se les difuminara su rostro en las fotos por temor a represalias.

En el caso de Mark Mackay él invirtió 85.000 libras, al cambio 104.500 euros. «Como lo de Estepona no salía adelante me propusieron cambiar su apartamento por otro en Marruecos», recuerda. El proyecto del reino alauita tampoco prosperó.

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA / Belfast

Enviado especial

Soñaron con una segunda vivienda en Estepona y entregaron dinero a cuenta a la agencia inmobiliaria británica Ocean View Properties, entre los años 2005 y 2006. Cuatro años después, más de 6 millones de euros en depósitos pagados por cerca de un centenar de familias de Irlanda del Norte se han esfumado por completo. Ahora, tras resultar infructuosos todos los esfuerzos por recuperar lo perdido, los afectados se han unido para interponer una querrela por estafa y apropiación indebida, relacionada con los 350 apartamentos de la promoción 'Estepona Beach and Country Club'.

EL MUNDO de Málaga se reunió en Belfast, durante el pasado puente de la Constitución, con cerca de 70 familias afectadas a las que representa el abogado con despacho en Marbella Antonio Flores, responsable de la firma *lawbird.com*, especializada en fraudes y estafas en la Costa del Sol relacionadas con británicos.

Dicho letrado explica que la sociedad española Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios S.L. fue la promotora que se iba a encargar de desarrollar el proyecto en una parcela de Estepona, que a día de hoy es un solar, «pero todo lo más lejos que llegaron fue a abonar la cantidad de 200.000 euros a cuenta del precio de la parcela, pactado en 18 millones de euros».

Entre Ocean View y Sun Golf existía un «acuerdo de comercialización» –acota Flores– mediante el cual la primera se comprometía a abonar una comisión a la segunda, «encargándose igualmente de cobrar las cantidades anticipadas de los compradores norirlandeses».

La agencia inmobiliaria británica se encargaba, igualmente, de buscar y recomendar a los compradores un despacho concreto de abogados, tanto en España como en Reino Unido. Los bufetes seleccionados «tenían consignas específicas sobre cómo gestionar la representación legal de los potenciales compradores, de tal suerte que ni uno solo de ellos cuenta en la actualidad con un contrato firmado», sostiene el abogado marbellí.

Por tales motivos, Flores denuncia abiertamente la «complicidad» de los abogados elegidos por Ocean View para representar a los compradores. Estos letrados, presuntos co-operadores necesarios en la estafa denunciada, remitieron a las familias norirlandesas contratos priva-

dos de compraventa, para ser firmados, con la obligación de ser devueltos a Ocean View, la cual se comprometía a devolver una de las copias firmadas por el promotor. Sin embargo, los afectados jamás recibieron documento alguno.

La idea del bufete marbellí Lawbird es interponer las acciones legales correspondientes en los juzgados de Estepona, aunque no descartan acudir a la Audiencia Nacional. Esta hipotética posibilidad está basada, explica Flores, en que «el empresario que representa a Sun Golf como administrador único, Ricardo Miranda Miret, tiene su sede social en Madrid y los representantes de Ocean View están radicados en el Reino Unido».

A Miranda, según los denuncia-

tes, no se le conoce proyecto alguno terminado o en proceso de desarrollo. De hecho, está presuntamente relacionado con otras dos estafas inmobiliarias, muy similares a las de Estepona, perpetradas en Marruecos y la República Dominicana.

Ollie Reel, uno de los afectados, cuenta que se interesó por el proyecto de Estepona en 2006 junto a sus tres hermanos. Invirtieron a través de un agente inmobiliario concertado con Ocean View en Belfast: «Dimos a cuenta 61.000 euros y nunca supimos del dinero, además allí no se ha puesto un solo ladrillo». Paralelamente, pagaron otros 78.000 euros a cuenta de un proyecto en la República Dominicana y los han perdido.

A pesar de lo anterior, Reel ase-

Alerta de fondos transferidos a República Dominicana

J. C. VILLANUEVA / Belfast

Enviado Especial

El sumario del llamado caso 'Malaya', en relación con la trama de corrupción municipal de Marbella que se enjuicia actualmente en Málaga, incluye un informe, encargado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a La Caixa, fechado el 17 de agosto de 2006, en el que se alertó del desvío de fondos abonados por los compradores de Estepona que fueron a parar a cuentas corrientes en la República Dominicana.

En el documento, de 27 folios de extensión, al que ha tenido acceso EL MUN-

DO, se relata que desde el 17 de febrero de 2006 al 28 de septiembre de 2009 la sociedad Paraíso Tropical S.A. –administrada por el empresario español Ricardo Miranda– recibió en sus cuentas de La Caixa 10 transferencias procedentes de la sociedad Punta Perla Caribbean Ltd, con domicilio en Gran Bretaña, por un valor de 14,6 millones de dólares.

Miranda comunicó a la entidad bancaria catalana que la sociedad Punta Perla Caribbean Golf Marina and Spa S.A. era la nueva propietaria del 99,4% de Paraíso Tropical S.A., producto de la compra de las

acciones que la sociedad CCF S.A. tenía hasta ese momento.

Se da la circunstancia de que al frente de CCF S.A. y otras sociedades que fueron propietarias de Paraíso Tropical S.A. figuran los conocidos empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos aparecen entre los 95 acusados del juicio por el caso 'Malaya'.

Los dos citados promotores inmobiliarios, acusados de entregar sobornos al ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, de quien eran socios, fueron en esta ocasión víctimas del empresa-

rio Ricardo Miranda, actualmente en libertad con cargos.

De hecho, Sánchez y Liétor denunciaron a Miranda en los tribunales dominicanos por fraude. Aseguran que se apropió de la totalidad de las participaciones sociales de Paraíso Tropical S.A., tras abonar tan sólo 12 millones de euros, a modo de señal, de un total de 240 millones de dólares que refleja el informe de La Caixa.

Miranda se apoderó de la parcela de 5 kilómetros de costa que Sánchez y Liétor poseían en la isla caribeña y donde anunció

la construcción de más de 6.000 viviendas de lujo. Hasta allí viajó en 2008 el príncipe Alberto de Mónaco para poner, junto al presidente dominicano, Leonel Fernández, la primera piedra de un proyecto fantasma, donde actualmente sólo hay hierbajos. El asunto se ha convertido en un gran escándalo mediático, conocido como el caso 'Punta Perla'.

Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Ricardo Miranda, a quien los afectados responsabilizan de haberse quedado con sus depósitos en última instancia. Tampoco fue posible contactar con Ocean View al ser ya una entidad inexistente.